

REVISTA DE REVISTAS

Carta pastoral del Ilmo. Sr. Obispo de Huejutla.

Sobre los últimos acontecimientos religiosos del país (1).

¡VIVA CRISTO REY!

Nós, el Doctor y Maestro D. José de Jesús Márquez y Zárate, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, primer Obispo de Huejutla.

Al Venerable Clero y Fieles de Nuestra Diócesis Salud y Bendición en Nuestro Señor Jesucristo.

VV. HH. e hijos nuestros muy amados:

Los últimos acontecimientos religiosos del país nos han consternado hondamente. El dolor que hemos sentido en estos aciagos días, tan preñados de males para la Religión y para la Patria, ha sido tan grande, que varias veces nos hemos visto tentados a pedir a Dios la muerte antes que ver la consumación del *horrible misterio de la iniquidad*.

Porque debemos deciros, VV. HH. e hijos carísimos, que los males que hoy comienzan y que estamos presenciando, no son sino el principio de aquellas grandes desgracias que amenazan muy de cerca a nuestra querida México; la pérdida de la Religión y la pérdida de la nacionalidad. He ahí precisamente lo que hemos llamado *misterio de la iniquidad*.

La impiedad, artera como su padre el Diablo, nos ha ido llevando insensiblemente de abismo en abismo, hasta ponernos al borde de este último, que no es sino el preludio del eterno caos.

Nadie que conozca un poco de Filosofía de la Historia podrá extrañarse de los últimos procedimientos del sectarismo mexicano en contra de la Iglesia Católica. El asalto alevoso al Templo de la Soledad en plena Capital de la República; el apoyo decisivo del elemento oficial a los iniciadores del Cisma; la persecución en masa de católicos indefensos, sólo porque vitorean al Papa y traducen con ardor sus sentimientos religiosos; la exclaustación de tantas inocentes religiosas sólo por el crimen de serlo; la clausura de tantos Seminarios, Escuelas, Casas de Beneficencia y demás Instituciones Católicas, sólo porque allí se adora y se ama a Jesucristo; la injusta detención de sacerdotes extranjeros en algunos puertos de la República, sólo por ser ministros del Culto Católico; los conatos por reducir el número de sacerdotes mexicanos en varios Obispados del País y por implantar a toda costa y a todo trance las Leyes inicuas de la Constitución; no vienen a ser otra cosa que las legítimas

(1) Según un telegrama de México del día 6, el señor Obispo de Huejutla ha sido consignado al Procurador General de Justicia por la siguiente Carta Pastoral. Esto indica que en México hay mucha libertad... ¡para callar!

e irrefragables consecuencias de las impías e insanas doctrinas sembradas en su oportunidad.

Por tanto, los males presentes no nos asombran, pero sí nos entristecen y llenan de profunda desolación.

¿Quién no se entristece y llora ante los gravísimos males que nos afligen, y sobre todo ante la perspectiva de un porvenir tan obscuro y tenebroso? Los días de relativa calma han huído quizá para no volver jamás y los negros sentimientos han venido a sustituir en nuestras almas las más puras y nobles ilusiones de nuestro espíritu. La Patria Mexicana poco antes alegre y regocijada cubriase de nuevo con los crespones de luto y de dolor al ver correr de nuevo la sangre de sus hijos; y la Religión Cristiana, que ha sido hasta aquí la compañera de nuestros infortunios y la luz de nuestras almas, acaso muera de pesar ante la horrenda ingratitud de los hijos a quienes diera el ser y que ahora están empeñados en su exterminio y destrucción.

Esta Madre amorosa que meciera blandamente la cuna de todos los Mexicanos que forman la actual generación y que les diera el signo de cristianos que los levanta muy alto sobre el bruto y el infiel, y que les ha ministrado a manos llenas el inestimable tesoro de la verdad, patrimonio exclusivo de los Pueblos Cristianos; hace ya algunos años que lleva enclavado un puñal en el pecho; y sin embargo, no puede morir porque el amor a sus cristianos hijos la sostiene. Ahora otros más ingratos hijos han jurado consumir el horrendo crimen de los primeros, ahogando ¡insensatos! los lamentos de la víctima con los estrepitosos hurras del sacrílego triunfo.

Sí, sí; porque la impiedad no se dará punto de reposo hasta no haber saciado sus iras con el total exterminio de la Iglesia de Cristo, ni se detendrá un sólo momento en la persecución de su víctima ante la posibilidad de que ésta huya de sus garras y viva para siempre.

Ante el sectarismo moderno ya no valen ni quejas, ni lamentos, ni lágrimas: la sangre de su inmaculada víctima le enfurece en vez de volverle a humanos sentimientos, como a la impiedad judaica la sangre del Nazareno en el Pretorio. Y así como la rabia farisaica sólo hubo de descansar cuando el Maestro Divino enclavado en la Cruz exhaló el último aliento, así el jacobinismo de hoy, jadeante de odio y de venganza no se dará punto de reposo hasta que la Iglesia, esposa inmaculada de Cristo, haya sido estrangulada en medio de las modernas sociedades y la idea cristiana borrada totalmente del seno de las conciencias.

La Iglesia de Jesucristo no deberá temer nada para sí, fundada como está sobre las promesas divinas que no fallarán jamás. Pero nosotros sabemos que si la Esposa Inmaculada de Cristo vivirá hasta el fin de los siglos y que su luz divina sólo se extinguirá con el último ocaso del sol, no ignoramos, empero que los pueblos sí pueden apostatar y hundirse de nuevo en las sombras de la muerte.

He aquí precisamente VV. HH. y muy amados hijos, el pensamiento que verdaderamente nos conturba: la posibilidad de que la Religión huya para siempre de nosotros yendo a sentar sus reales en pueblos más dignos de ella. Porque no debemos dudar ni un momento, que la Religión Cristiana que nosotros hemos libado de los pechos de nuestras madres, y que ha sido hasta ahora el alma de nuestra alma, es el mayor don que Dios en su inescrutable

Providencia puede conceder al hombre y a la sociedad. Y como los dones divinos se pierden por las ingratitudes humanas, tememos seriamente haber colmado la medida de las misericordias divinas y merecido justamente tan horrendo castigo.

Sin embargo, Dios, que hace a los pueblos sanables (1) y a los individuos aguarda a penitencia (2), nos ofrece una oportunidad magnífica para robustecernos en la fe en las lides con los enemigos de Cristo.

Porque no cabe duda, carísimos hijos, que los tiempos presentes son tiempos de lucha, y para nosotros, de una lucha tan encarnizada y feroz como jamás se había registrado en los anales de nuestra Historia.

Hasta aquí, aunque perseguidos, habíamos siempre callado y siempre nos habíamos resignado con la persecución. En el largo y doloroso camino que llevamos recorrido durante más de un siglo de injusticias, dos cosas resaltan de muy marcada manera: la rabia feroz del sectarismo que no ha perdido la oportunidad para azotar despiadadamente a la Iglesia y, por otra, el silencio misterioso de esta misma Iglesia en medio de la vorágine de la persecución. En ningún país del mundo la Iglesia ha sido tan cruelmente perseguida como en México, y en ninguna otra parte como aquí se ha sabido callar y sufrir resignadamente. La fiel Esposa del Crucificado no ha sabido nunca odiar a sus enemigos, sino sólo amar compasivamente a sus perseguidores. Allí, está, VV. HH. e hijos nuestros, el último Edicto del Venerable Arzobispo de México (3) para no dejarnos mentir; allí está ese documento inmortal que será una de las páginas más brillantes de nuestra Historia Religiosa. En él, el Primado de la Iglesia Mexicana, la autoridad más respetable de cuantas existen entre nosotros levanta su voz para condenar la injusticia y el cisma. Y ¿se deshace acaso en recriminaciones contra el régimen actual que es la verdadera fuente de nuestras desgracias? ¿lanza por ventura desahogos contra él? ¿Hay en ese documento siquiera una sola palabra que pudiera ser dicha mejor o de más caritativa manera?

La Iglesia Católica ha querido vencer al sectarismo con el prudente silencio y la resignación; pero el sectarismo no ha comprendido la delicadeza de este proceder, y se ha envalentonado lejos de rendirse. ¿Convendrá seguir en adelante la misma conducta?

Nosotros creemos que no, sino que ha llegado la hora de proclamar muy alto la justicia de nuestra causa y de hacer valer nuestros derechos con toda la energía de nuestras almas. Acaso la Iglesia Mexicana haya pecado hasta aquí de *excesiva prudencia*. Sin atrevernos nos a juzgarla, ni dar nuestro fallo sobre hechos pasados que es bien difícil aquilatar en toda su fuerza, decimos solamente que en los actuales momentos, sin el menor género de duda, todo nos invita a luchar valerosamente por la defensa de nuestros intereses. Creemos desde luego, que el silencio en estos instantes en que la impiedad se pone frente a frente a nosotros equivaldría a una capitulación vergonzosa.

El efecto; el jacobinismo ha venido a provocarnos, y a provocarnos en nuestros últimos reductos, en nuestros últimos baluartes, más allá de los cuales

(1) Sap. I, 14.

(2) Sap. XII, 10.

(3) Del 25 febr. 1925.

no hay más que la ignominia de la esclavitud. El es autor directo de cuantos atentados se han verificado contra la Iglesia en el vasto territorio nacional; quien promueve asonadas, motines y escándalos para lanzarlos de continuo contra la faz augusta de nuestra Religión; quien siembra absurdos y arteras calumnias contra la Iglesia, y quien ha abortado un Cisma ridículo para separarnos de Roma y convertirnos en esclavos del Poder Temporal.

Y ¿vamos nosotros a llevar con paciencia semejantes atropellos? ¿Sellaremos de nuevo nuestros labios ante la balumba de denuestos e invectivas que se lanzan en todos los tonos contra nuestra Iglesia para justificar tan inauditos atentados? ¿No preguntaremos siquiera al verdugo despiadado por qué hiere su divina faz? Y, sobre todo, nosotros, los Doctores en Israel, los Jefes del Pueblo Santo, vamos a enmudecer ante el diluvio de herejías e insanas doctrinas que por todas partes pululan para matar el pensamiento cristiano y borrarlo completamente de la faz de nuestra Patria?

¡No, no! y mil veces no! ¡Vive Dios! que la verdad tendrá siempre defensores, y al lado de cada tirano que la oprima tendrá siempre una voz que la pregone. Porque la verdad VV. HH. e hijos nuestros amadísimos, no necesita propiamente defensores, sino sólo pregoneros que tengan el valor de exponerla al mundo como es en sí.

Vamos, pues, a cumplir con este sagrado deber, al mismo tiempo que a daros los oportunos avisos que deben informar vuestra conducta en las actuales difíciles circunstancias. Pero, permitidnos antes deciros con el corazón en la mano que, al trazar estas líneas no nos guía sentimiento ninguno o pasión desordenada, sino única y exclusivamente el deseo de cumplir con fidelidad el encargo que hemos recibido de Jesucristo de apacentar vuestras almas y de guiarlas al Cielo.

* * *

Renovamos con todo vosotros el juramento de firmísima adhesión y de fidelidad inquebrantable al Sumo Pontífice, Vicario de Jesucristo en la Tierra y piedra angular de la Iglesia, y declaramos solemnemente y a la faz del mundo que profesamos la Fe Católica Apostólica y Romana que Jesucristo enseñó y que predicaron los Apóstoles, y que en esta Fe queremos vivir y morir, y que por defenderla estamos dispuestos a dar la vida si fuere necesario.

Protestamos enérgicamente contra el Cisma que se pretende establecer entre nosotros, para arrancarnos del seno de la verdadera Iglesia y agregarnos a la Sinagoga de Satanás.

Creemos y firmísimamente sostenemos que la Iglesia es una Sociedad perfecta por todos conceptos, independiente de la Sociedad Civil y superior a ella; bien que confesamos que la sociedad temporal es una sociedad perfecta en su género e independiente de la sociedad espiritual.

La Iglesia de Jesucristo tiene derecho indiscutible de poseer bienes temporales, muebles e inmuebles, conferido por su mismo Divino Fundador y reconocido por los pueblos más cultos de la tierra. Esto es fundamental, y no necesita propiamente de ningún reconocimiento. Por tanto, los Templos son propiedad de la Iglesia y no del Estado Civil; y si éste los arrebatara, o bien usurpa los derechos temporales de la iglesia, cualesquiera que sean, no

sólo peca contra el séptimo precepto de la Ley Divina que dice: «no hurtarás» sino también contra el primero que prohíbe profanar las cosas santas.

La Iglesia tiene derecho divino—acaso el más sagrado de todos—de enseñar en todas partes y sin trabas de ninguna especie la Religión de Jesucristo. Por tanto tiene derecho de fundar Universidades, Ateneos y Academias de Instrucción Secundaria en donde se impartan amplios conocimientos de Religión. «A fortiori» de fundar y regir Seminarios en donde forma a sus ministros y los prepara para el gobierno de las almas. Tiene también derecho de establecer Escuelas Primarias en donde se enseñen los rudimentos de la Fe; y le asiste aun el derecho natural e inviolable de enseñar en todas partes la Ciencia del orden humano y natural.

En consecuencia, los gobiernos que prohíben la enseñanza de la Religión en las escuelas ya primarias ya secundarias, violan evidentemente el Derecho Divino; y los que excluyen a la Iglesia de la enseñanza de las Ciencias Naturales y Humanas violan el derecho natural.

La Iglesia tiene derecho exclusivo para dictar e interpretar las leyes que se refieren a la consecución del fin para que fué creada: que es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Por tanto el artículo 130 de la Constitución, que a la letra dice: «*corresponde a los poderes federales ejercer en materias de cultos religiosos y disciplina externa la intervención que designen las leyes*», es altamente atentatorio contra la naturaleza de la misma Iglesia. El Gobierno Civil debe saber de una vez para siempre que *solo aquellos a quienes el espíritu santo puso para gobernar a la iglesia de Dios, pueden dictar leyes* (1); y si se trata del Culto, el ordenarlo es de la competencia exclusiva de la Silla Apostólica (2). Los ministros de la Iglesia, en el ejercicio del culto, únicamente dependen de sus Superiores Eclesiásticos. Toca a los Obispos y demás jueces ordinarios la vigilancia sobre el cumplimiento de las Leyes Litúrgicas (3). Bien se ven las intenciones de los constituyentes de Querétaro con respecto a la Iglesia Católica: quisieron sepultarla, exterminarla y aun quitarla enteramente del medio. Porque ¿qué viene a quedar de la verdadera Iglesia de Cristo, si no es ella quien legisla acerca de sus asuntos más íntimos, sino el Gobierno Civil? ¿A qué viene a reducirse en el orden público y social, si se niega a las Iglesias particulares toda personalidad? Más todavía; los sacerdotes han sido siempre y en todas partes los representantes genuinos de las diversas religiones que han aparecido en el curso de los siglos.

Ellos, aún en medio de los pueblos más bárbaros, han sido tenidos y respetados como intermediarios entre Dios y los hombres, como lugar-tenientes de Dios en la tierra y en todos caso como vivos oráculos de la verdad religiosa. En ocasiones ejercían también el Gobierno Civil, o ciertamente, en el ejercicio de sus funciones eran absolutamente independientes del Poder Temporal.

En la Iglesia de Jesucristo, los sacerdotes y aun los mismos ministros inferiores *son reyes*, como consagrados que están al servicio del Rey Eterno de la Gloria, y *servir a Dios es reinar* (4); son, además, superiores en excelen-

(1) Act. XX, 28.

(2) Nuevo Código, Can. 12, 7.

(3) Nuevo Código, Can. 1260 y 1261.

(4) Santo Tomás de Aquino, Suplem, Quaest. XL, Art. 1.

cia y dignidad a todo el pueblo, y aun a los mismos príncipes y reyes de la tierra (5). La misión de los sacerdotes es divina, porque a ellos fué dicho (6) «así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros».

Los sacerdotes y ministros dependen del Obispo a quien el Espíritu Santo puso para gobernar la Iglesia de Dios; y todos los Obispos y todos los fieles dependemos del Papa, a quien en la persona de San Pedro le fué dicho (7); «apacienta mis ovejas, a pacienta mis corderos», y «tu serás la piedra fundamental de mi Iglesia» (8).

Pretender pues, que los ministros de los cultos sean considerados como personas que ejercen una profesión y estén directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten (9), es una locura y una pretensión absurda; una locura, porque pretende que el Gobierno Civil extienda su acción a mundos que le están totalmente vedados; una pretensión absurda, porque es reformar la obra de Dios, la obra de Jesucristo, quien ha dicho: «los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán» (10).

Si estudiamos a fondo la obra del sectarismo consignada en la llamada Constitución, deduciremos, aun sin gran esfuerzo dialéctico, que las llamadas leyes sobre asuntos religiosos no son otra cosa que la proscripción oficial de la Iglesia Católica en México.

En efecto: por Iglesia Católica debe entenderse, no lo que entienden los jacobinos mexicanos, que quisieran verla a sus plantas como esclava del Estado, y nada más; sino la Iglesia, que Jesucristo instituyó con todas sus atribuciones, derechos y facultades: sociedad perfecta, libre y soberana en los asuntos concernientes a su fin y sujeta a los pastores legítimos puestos por el Espíritu Santo para gobernarla.

Ahora bien: ¿Puede siquiera concebirse una sociedad de tal naturaleza en un país donde el Gobierno declara que los templos son suyos; que él determinará los que deben continuar destinados a su objeto; que él será la única autoridad competente para intervenir en materia de Culto, y, en donde finalmente, los sacerdotes no son ya súbditos de la Iglesia, esto es, del Papa y de los Obispos, sino simple y sencillamente empleados del Gobierno o conserjes de los edificios públicos? (11).

Ya no hay para qué detenernos más en consideraciones de suyo obvias; los constituyentes, o más bien dicho, el sectarismo mexicano ha pretendido aniquilar a la Iglesia Católica con las llamadas leyes fundamentales del país; y el Gobierno actual, celosísimo del cumplimiento de esas leyes, se está encargando de ejecutarlas al pie de la letra. Según las declaraciones del señor Presidente de la República, el Gobierno usurpó el Templo de la Soledad «porque el *clero católico, apostólico, romano...* manifestó abiertamente su rebeldía a los mandatos constitucionales y su menosprecio a las autoridades, declarando por boca de algunos de sus miembros prominentes, que no reconocen la au-

(5) Santo Tomás, *ibid.* Quaest XXXV, Art. 2.

(6) Joan XX, 21.

(7) Joan. XXI, 16 y 17.

(8) Matth. XVI, 18.

(9) Constitución Federal, Art. 130.

(10) Marc. XIII, 31.

(11) Constitución F., Art. 130.

toridad del Estado sobre los Templos, ni su derecho a reglamentar el ejercicio de los cultos» (12).

Por consiguiente, el actual Gobierno pone a la Iglesia Mexicana esta disyuntiva: o te sometes a mi autoridad y permites que yo te gobierne a mi antojo y haga de ti lo que quiera, o yo te perseguiré hasta tu total exterminio.

Frente a esta disyuntiva, VV. HH. e hijos nuestros, nos optamos resueltamente por la persecución. Queremos antes ser perseguidos y exterminados, que aceptar ignominiosamente la coyunda de la esclavitud. Es mejor morir en las garras de nuestros enemigos que bajar al sepulcro cubiertos de ignominia y después de haber traicionado a la causa sacrosanta de Jesucristo. Es mejor entregarnos resueltamente en los brazos de la muerte, que contemplar impasibles la consumación del misterio de la iniquidad.

Así pues; nos, por amor a Jesucristo y en cumplimiento de nuestro sagrado deber, declaramos de una manera solemne que no nos someteremos jamás a la autoridad del Gobierno Civil en asuntos eclesiásticos; que en tales asuntos no reconocemos más autoridad que la del Sumo Pontífice; que las leyes constitucionales, las orgánicas u otras de cualesquiera denominación, contrarias a las leyes divinas y eclesiásticas, son írritas y de ningún valor, y que tales leyes, por ser profundamente inmorales, no pueden prescribir, ni por razón de tiempo, ni de aquiescencia o apatía de los católicos, ni por ninguno de los títulos que constituyen la prescripción ordinaria.

* * *

A fin de que tengáis VV. HH. e hijos nuestros normas ciertas y seguras a qué ateneros en lo sucesivo, y particularmente en los momentos presentes, hemos tenido a bien acordar las siguientes providencias:

Primera.—Ningún sacerdote de nuestro Obispado podrá proporcionar al Gobierno planos, inventarios o cualesquiera otras razones de los Templos que están a su cargo.

Segunda.—Ningún sacerdote podrá sujetarse a las leyes, órdenes o disposiciones del Gobierno Civil, ni a las ya promulgadas ni a las que se promulguen en lo sucesivo siempre que versen acerca de asuntos eclesiásticos o contravengan al Derecho Divino, positivo o natural o las Leyes Santas de la Iglesia.

Tercera.—Si las autoridades apelan a la violencia, no será lícito, ni a los fieles ni al Clero acudir a la fuerza bruta para repeler la agresión, sino que deberán observar la conducta mansa, pero digna, de los mártires del Cristianismo.

Cuarta.—Por consiguiente prohibimos terminantemente los motines y asonadas, y en general cualesquiera manifestaciones de la fuerza bruta contra las autoridades constituídas.

Quinta.—Exhortamos, empero, a todos nuestros hijos a la defensa de nuestros intereses católicos, poniendo en juego toda la fuerza moral de que somos capaces. Unámonos todos en apretadas filas para defender la Santa Causa de Cristo. Por medio de protestas, representaciones, escritos y otros medios ordinarios y extraordinarios, peleemos las batallas del Señor; seguros de la victoria, sí, como esperamos, permanecemos todos unidos en la oración y en

(12) Decreto de 13 de marzo.

la defensa de nuestros sagrados intereses. *Aprendamos*—decía el inmortal Pontífice Pío X a los católicos franceses en 1906—*aprendamos el ejemplo de nuestros adversarios: divididos en multitud de puntos, se unen, sin embargo, para formar un bloque contra nosotros. Divididos también nosotros, tal vez, sobre cuestiones políticas, sociales o económicas, unámonos para la defensa del más sagrado de nuestros intereses. Tenemos una base común a todos como católicos: nuestra Santa Fe Cristiana, la Fe de nuestros Padres. Unámonos sobre esta base. Rechacemos los gérmenes de división si llega a haberlos entre nosotros. En el pensamiento y en la acción sea tan firme la unión como debe serla entre hombres que luchan por la misma causa, sobre todo, siendo esta causa tal que por su triunfo debe sacrificar cada uno de buen grado todas sus opiniones personales.*

Sexta.—Por último, Venerables Hermanos e hijos carísimos, como en asuntos de orden sobrenatural nada puede hacer la industria humana sin el auxilio de lo alto, mandamos que en todos los Templos de nuestro Obispado se hagan rogativas para alcanzar de Dios el remedio de los males presentes. Dejamos al cielo y a la piedad de los señores Curas la determinación de esas rogativas; pero no queremos que falte alguna plegaria al Sacratísimo Corazón de Jesús en desagravio de los crímenes últimamente cometidos y alguna oración muy ferviente a la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina y celestial Patrona de la Nación Mexicana, para que, intercediendo por nosotros delante de su Divino Hijo, nos alcance las divinas misericordias.

Recibid, mientras tanto, Venerables Hermanos y amados hijos, la bendición pastoral que de lo íntimo de nuestro corazón os enviamos. En el Nombre del Padre † y del Hijo † y del Espíritu Santo †.

Esta carta se leerá en todas las misas que se celebren el domingo siguiente a su recepción.

Dada en nuestra Residencia Episcopal de Huejutla, y refrendada según estilo a los tres días del mes de abril del año del Señor de mil novecientos veinticinco.—† José de Jesús, Obispo de Huejutla.

Proyecto de ley.

El senado y la cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º—Las escuelas libres de enseñanza primaria, establecidas en la República, gozarán de un subsidio mensual a cargo del Estado, siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

- a) Funcionar en lugar conveniente y en condiciones de higiene adecuadas;
- b) Dar la enseñanza conforme al minimum establecido en la ley 1420 de educación común;
- c) Educar un número no menor de cuarenta niños;
- d) Tener maestros con título expedido por alguna de las escuelas oficiales de la nación o de las provincias o con práctica de cinco años, por lo menos, en la docencia.

Art. 2.º—El subsidio será destinado al pago del personal docente y equivaldrá, para cada maestro de las escuelas libres, a las dos terceras partes del sueldo que gozan los maestros de las escuelas oficiales.

El subsidio se acordará a razón de un maestro por cada cuarenta alumnos o fracción que no baje de veinte.

Art. 3.º—El Consejo Nacional de Educación proveerá de libros y útiles a los alumnos gratuitos de las escuelas subsidiarias.

Art. 4.º—Las escuelas libres que quieran acogerse a los beneficios de esta ley, deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación, haber llenado los requisitos a que se refiere el artículo primero.

Art. 5.º—Los subsidios que anualmente acuerda el presupuesto nacional a las escuelas libres de enseñanza primaria, quedan incorporados al fondo del Consejo Nacional de Educación, a cargo de cuyo presupuesto estará el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.º.

El Consejo Nacional de Educación podrá distribuir los subsidios directamente o por intermedio de los consejos de educación de las provincias.

Art. 6.º—Los directores de escuelas que produjeran información falsa, serán penados con multa de \$ 500 a 1.000 moneda nacional por la primera vez, y con el doble de la multa y supresión del subsidio en caso de reincidencia.

Art. 7.º—Comuníquese, etc.

F. Cafferata.

Sr. Cafferata.—Señor Presidente:

En virtud del principio constitucional de la libertad de enseñar que no es más que la consagración de un principio de derecho natural, funcionan en la República numerosos establecimientos libres, que concurren con el Estado a la obra de la educación común.

Nuestra Constitución consagra la libertad de enseñanza como una de las conquistas más preciosas de la República. Sus artículos 5, 14, 25, 67 y 87 la establecen de modo concluyente, y si el inciso 16 del artículo 67 faculta al Congreso para «dictar planes generales de enseñanza general y universitarias», ello no puede estar en pugna con el artículo 28 que prohíbe que reglamenten su ejercicio, los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución.

Y no podía ser de otro modo desde que la educación es función esencial del hogar y pertenece por naturaleza a los padres de familia, que sólo por necesidad la han delegado en el maestro, por razones de orden técnico o económico.

De allí nace la escuela privada, la primera que tuvo a su cargo la educación común hasta que las exigencias crecientes de la población y la necesidad de difundir la enseñanza a todos los habitantes del país, obligaron al Estado a crear la escuela pública, atendiendo con sus recursos el vasto problema de la obligación, la gratitud y la universalidad de la enseñanza.

* * *

«Elemento indispensable a toda nación civilizada es la instrucción pública. El mundo moderno puede, bajo este punto de vista, reivindicar una superioridad indiscutible sobre la Edad Media y la antigüedad. Hace algunos siglos sólo algunos pocos privilegiados tenían la facultad de instruirse. El primer lugar es hoy para los pueblos que muestran mayor afán por instruirse y cuyos gobiernos despliegan más perfecta inteligencia práctica a fin de corresponder a esa noble aspiración sin menoscabo de los derechos supremos del hogar y de la conciencia.»

Esta difusión de la instrucción en las naciones modernas, reconoce por origen dos causas: el espíritu cristiano y el espíritu democrático.

Por el primero, Alemania cuenta desde hace tres siglos con infinidad de escuelas populares. Era necesario que todos aprendiesen a leer porque la Biblia era el oráculo de todos los creyentes. Bajo el influjo del segundo, ha ensanchado Francia considerablemente el dominio de la instrucción del pueblo. Era necesario que todos los franceses aprendieran a leer, porque todos tenían un día que votar. Estados Unidos, bajo la influencia simultánea del espíritu cristiano y del espíritu democrático, ha dado también a la instrucción popular un extraordinario desarrollo.

La escuela oficial y la escuela libre concurren cada una por su parte a la obra civilizadora de la educación y deben merecer del Estado la misma solicitud.

No voy a entrar al fondo de la cuestión ni a discutir al Estado su facultad de educar, por más que opiniones muy respetables a las cuales me adhiero y el ejemplo de muchas naciones se pronuncien en contra de la intervención oficial en materia de educación.

Así, Mr. Hippeau, enviado por el gobierno francés a estudiar la educación pública en Estados Unidos, en 1870, escribía ya en aquel entonces que «en la enseñanza, como en todo, la raza anglo-sajona, para conservar su independencia, no dejaba al Estado sino la autoridad necesaria para proteger el libre desenvolvimiento de las energías individuales, al revés de nuestra raza latina que considera como el ideal de gobierno, una administración central, que envuelve en sus redes todas las fuerzas vitales de un pueblo, en que todo se mueve a impulso de un motor único».

Creo, con el publicista italiano Minghetti—citado por Gorostarzu—, que si los padres de familia, si los institutos privados, si las asociaciones libres, bastasen a proveer a la debida educación de todo ciudadano, el Estado no tendría la necesidad de tomarse ese cuidado.

Pero estamos frente a una cuestión de hecho y de derecho que cabe analizar, para fundamentar la iniciativa sometida a la deliberación de la honorable Cámara.

¿La escuela libre llena los fines de la educación común?

Si los llena, ¿tiene derecho a la asistencia oficial?

¿Esta asistencia es onerosa para el Estado?

La escuela privada es la escuela tradicional en la República Argentina. Antes de la aparición de la escuela pública, ella llenaba ampliamente las necesidades de la instrucción popular. En la escuela privada se formaron nuestros mayores y todos los hombres que contribuyeron al desarrollo y el progreso de la nacionalidad. En ellas aprendió Mariano Moreno, de labios de un humilde franciscano, fray Cayetano Rodríguez, los principios de libertad que más tarde habían de inflamar su verbo revolucionario, y Avellaneda los secretos de su elocuencia. En ellas se formaron Mitre y Sarmiento, Vélez y Paz, Estrada y Félix Frías, Goyena y Achával Rodríguez y tantos otros que honraron a la patria con las manifestaciones de su talento.

«El sistema ha sido ensayado con éxito—dice un editorial de *La Prensa* de febrero de 1924, corroborando esta afirmación—. La experiencia ha comprobado

que la formación de alfabetos por la doctrina libre, reduce para el erario en más del 75 por 100 el costo medio de cada alumno. El sistema, por otra parte, tiene una tradición nacional que lo recomienda. Cuando el país no había organizado su instrucción pública, los maestros particulares suplieron esa deficiencia y se aplicaron con tal celo a su función civilizadora, que bajo su égida crecieron y se vigorizaron algunos de los ingenios que han dado lustre a la mentalidad argentina.»

La sescuelas libres educan en la actualidad muchos millares de niños, que pueden calcularse en 40.000 para la capital federal y en 90.000 para las provincias.

Su eficacia está fuera de duda y el país recibe de ellas un señalado servicio.

Visto sólo por el aspecto económico, puede calcularse en una cifra considerable el ahorro que para el tesoro significa la contribución privada a la instrucción pública.

Por lo que hace a la naturaleza de la instrucción, el favor que el público dispensa a las escuelas privadas viene a demostrar que ellas consultan la voluntad de los padres de familia que, por razones ideológicas o por el crédito de las escuelas llevan sus hijos a la enseñanza libre.

Y es obvio que así sea.

Si los padres de familia no están conformes con la escuela oficial, no puede el Estado obligarlos a que envíen a ella sus hijos, ni a que paguen dos escuelas: la oficial y la propia; sin embargo, esto es lo que ocurre en la práctica. No puede, por otra parte, extorsionarse la conciencia de los padres obligándoles a enviar sus hijos a escuelas, *soi-dissant* neutras, de donde está proscripta toda idea religiosa, contrariando abiertamente la enseñanza del hogar y destruyendo el principio indiscutible de que la escuela primaria no puede ser sino su prolongación.

El verdadero principio, la verdadera libertad está en suministrar a cada niño la escuela que responda a la confesión o las ideas del hogar, siempre que ellas no conspiren contra el orden público y las leyes del país.

En ese principio se inspiran las nuevas tendencias de los Estados; a él responde el capítulo sobre enseñanza, de la nueva constitución alemana de 1919, «A requisición—dice el artículo 146, segundo apartado—de las personas a quienes pertenece el derecho de educación, serán instituidos en el interior de las comunas, escuelas populares de su confesión o correspondiendo a sus concepciones filosóficas, siempre que no se interrumpa con esto una enseñanza ordenada en el sentido del apartado primero», es decir, que no exista una escuela oficial de su comunión (aclaración del artículo 147).

Hoy, consultado sobre este particular, un alto interés para aquellos padres de familia que, al par que la instrucción general de sus hijos, quieren que la enseñanza confesional que el niño ha recibido en el hogar y que queda troncada en la escuela oficial para su carácter neutro.

De ahí que las escuelas libres que se ajustan al programa de las escuelas públicas y que además consultan la opinión religiosa de los padres de familia tengan su predilección.

Mas, para que la libertad de enseñar quede ampliamente garantizada, no basta la existencia de las escuelas libres, sino que es menester que ellas sean colocadas en un pie de igualdad que les permita llenar ampliamente los fines de su creación.

Actualmente la situación de la escuela libre es generalmente precaria y lo es más si se la considera con relación al Estado. El subsidio que en algunos casos les acuerda es, más que subsidio, una dádiva librada a la buena voluntad de los miembros del Congreso y que significa una suma mínima dentro del presupuesto escolar.

Para poner en evidencia esta desigualdad, basta comparar las cifras oficiales que nos dan el costo medio por alumno y por mes en las escuelas libres y en las oficiales.

Los datos respecto a las primeras me han sido suministrados por el ministerio de relaciones y beneficencia, que lleva una prolija estadística de las escuelas subsidiadas por el Estado.

De ellos se desprende, que el costo medio por alumno en las escuelas primarias subvencionadas por el Estado, el año 1912, era de \$ 1,43 por mes. En cambio, ya el año de 1915, cada alumno de las escuelas primarias oficiales costaba al mes \$ 10,41, ¡casi diez veces más! Quiere decir que las escuelas particulares subsidiadas, que no son todas las que existen, ahorran al Estado, anualmente, las nueve décimas partes de lo que hubiera invertido en su sostenimiento. Bastaría este aspecto económico para meditar seriamente en la conveniencia del sistema que propiciamos.

Agréguese a esto que las sumas invertidas por el Estado no se dedican íntegramente a la educación, porque el organismo burocrático creado para la superior dirección de la enseñanza emplea centenares de ciudadanos ajenos a las tareas docentes. Y agréguese más: el valor de los inmuebles en que funcionan las escuelas privadas y los sendos millones de pesos que el estado invierte en la construcción y dotación de la escuela oficial.

La solución de este problema, en forma que consulte los intereses de la educación, la ideología de los padres de familia, la libertad de enseñanza, la economía del estado, está en el sistema implantado por varios países europeos y americanos y que poco a poco tiende a abrirse camino en otros, como Francia, donde la idea gana terreno día a día.

Es la distribución equitativa del presupuesto de instrucción pública entre la escuela oficial y las escuelas privadas, siempre que éstas se ajusten a ciertas condiciones que la ley estipula.

Es lo que se conoce como la repartición proporcional escolar.

No se trata de un privilegio a obtener, sino de un derecho común. No de una ventaja económica para una clase, sino un beneficio para todas las familias. No de un suplemento de bienestar para los fines, sino de justicia y de igualdad para todos».

La escuela pública está a cargo del presupuesto público, mejor dicho, a cargo de todos los contribuyentes. La escuela privada es costada por sus fundadores, que asumen toda la carga. Esta carga voluntaria no nos dispensa de ningún modo del sostenimiento de la escuela oficial. Ellos concurren como contribuyentes y así pagan dos veces las cargas escolares. Esto es ilógico e injusto.

* * *

Los actuales subsidios a los establecimientos de enseñanza privadas, que acuerda anualmente la ley del presupuesto como una gracia, como una donación, que las mismas instituciones obtienen con dificultad a veces y después

de una laboriosa tramitación, serían substituídos por la obligación permanente del Estado, que asimilaría en derechos y en prerrogativas la escuela privada a la oficial, colocándolas en el pie de igualdad que le corresponde, por su rol, por su acción civilizadora, por la garantía de la constitución y por la forma cómo consultan la conciencia de los ciudadanos.

* * *

Me he inspirado para elaborar este proyecto en los antecedentes argentinos y en la legislación extranjera, que sobre esta materia es de un alto interés y de la más reciente actualidad.

La idea de la repartición proporcional escolar estaba contenida ya en el meditado proyecto de ley orgánica de la enseñanza que presentara el entonces diputado por Entre Ríos, doctor Celestino Marcó, en el capítulo IV de las subvenciones y becas. En ese capítulo se proyecta el bono escolar, que sería entregado a los padres de familia que cada hijo de seis a catorce años de edad, a fin de que puedan costear en la campaña maestros particulares, y se establece que «se acordarán subvenciones a los institutos de enseñanza libre que admitan alumnos subvencionados en las condiciones de los respectivos reglamentos». En este proyecto la subvención se establece con carácter facultativo (art. 49). Más tarde, los exdiputados constituyentes de Santa Fe, Casiello y Berras la propusieron a la convención de esa provincia.

La ley holandesa es la que me ha servido, en parte de modelo para esta iniciativa. Fué dada el 9 de octubre de 1920 y presentada por un protestante, el doctor de Visser, ministro de instrucción pública. Esta ley, llamada «Ley de pacificación», costea, bajo ciertas condiciones, a los maestros de las escuelas privadas y ayuda a las construcciones escolares con la cuarta parte de su valor.

El sistema de la ley puede concretarse—dice el doctor Rómulo Amadeo, que ha tratado con especial competencia este asunto,—en las cinco proposiciones siguientes:

Igualdad financiera de todas las escuelas primarias, públicas y privadas.

Igualdad de las escuelas normales privadas con relación a las escuelas normales oficiales.

Igualdad a todos los niños indigentes, respecto a los subsidios que otorgue la comuna en favor de la frecuencia escolar.

Igualdad de todos los maestros en lo referente a las pensiones de retiro.

Igualdad de todas las familias ante el principio de la contribución escolar.

Además, el legislador holandés ha establecido una contribución de los alumnos en todas las escuelas, proporcional a sus recursos, que oscila entre un minimum de cinco céntimos por semana y el costo medio de la enseñanza por alumno, contribución fijada tanto para la escuela privada como para la oficial. Después de grandes discusiones, los estados generales de Holanda estimaron que la gratuidad descansa sobre un error psicológico, pues el pueblo sólo aprecia una cosa por lo que cuesta y por ello se mantuvo rigurosamente el principio de la contribución.

Por mi parte, sería partidario de un sistema mixto, gratuito o pago, según los recursos de los padres.

La igualdad entre la enseñanza pública y la enseñanza privada—afirmaba en 1918 el inspector de las provincias del norte de Holanda—es un hecho

que aún para los más decididos partidarios de la escuela oficial, no es aceptado sólo como una necesidad ante la cual es preciso someterse, sino como una concurrencia de todo punto de vista saludable.

La igualdad de todas las escuelas ante la solicitud de los poderes públicos, es no solamente un principio de justicia, sino que se impone a todos los espíritus imparciales, como un principio de progreso.

El subsidio en Holanda equivale al reembolso del sueldo de los maestros, cuyo minimum es fijado por la ley misma, proporcional al número de alumnos que frecuentan la escuela. Un maestro, por debajo de cuarenta alumnos; dos, de cuarenta y uno a noventa; por encima de esta cifra, un institutor por cada grupo suplementario de cincuenta y cinco alumnos.

Tal es la regla y se explica porque el estado no puede tomar en cuenta más que los gastos de los maestros que considera necesarios para una buena enseñanza. Además las comunas distribuyen alimentos y vestidos a todos los niños pobres sin distinción de la escuela a que concurren.

Con esta ley Holanda dentro de poco no tendrá ningún niño de 13 a 14 años que no sepa leer ni escribir. Así permite esperar la proporción decreciente de analfabetos que en 1908 era de 10 %; en 1900, de 2,71 %; en 1908, de 0.10 %.

Bélgica, es otro de los países que ha alcanzado un alto grado de progreso en materia escolar sancionando el principio de la repartición proporcional. Fué adoptado el sistema en virtud de la ley Pouillet, de febrero de 1914, complementada con la de 1919, presentada por el ministro socialista Destrée, a cargo de la instrucción pública.

La enseñanza primaria se da en escuelas: *comunales, adoptables y adoptados.*

La comuna asume la carga de remunerar al personal y proveer de útiles a los alumnos, en las escuelas adoptadas, que son escuelas libres, dentro de ciertas condiciones exigidas para su adopción.

En Inglaterra, la «education act», votada en 1902, por el gobierno de lord Salisbury y de Mr. Balfour, consagraba la igualdad casi completa entre las escuelas libres y las escuelas primarias públicas.

Los gastos ordinarios de la escuela libre, son cubiertos en sus 3/4 partes por el Estado, las tasas locales, proveen a la otra 1/4 parte. El terreno y las construcciones son a cargo del director propietario de la escuela, pero el mantenimiento del edificio y del material escolar es a cargo de la comuna. La escuela libre está administrada por un comité de seis miembros, de los cuales, dos son nombrados por autoridad civil y los otros cuatro por los propietarios (Doctor Rómulo Amadeo, «La repartición proporcional escolar»).

En Francia fué distribuido en la cámara de diputados firmado por Mr. de Baudry D'Asson y por sesenta diputados más, en enero de 1923, un proyecto de repartición proporcional escolar, por el que se fija para las escuelas privadas un minimum de cien francos por alumno. El gasto se reparte entre el Estado, los departamentos y las comunas, en proporción a los gastos de la enseñanza primaria pública.

Para adquirir derecho a las subvenciones obligatorias se tienen en cuenta solamente a los alumnos de las escuelas privadas que reciben gratuitamente la enseñanza de todas las materias impuestas por la ley.

La legislación francesa de la enseñanza primaria—dicen los diputados fir-

mantes—no mantendrá sus promesas de gratuidad, ni garantizará el principio de libertad, sino el día en que haya realizado la participación de las escuelas privadas en los presupuestos públicos o más exactamente, la participación en el presupuesto de la enseñanza de todos los niños de edad escolar cualquiera sea la escuela que frecuenten. Y entre otros argumentos recuerdan que Mr. Herriot, pedía subvención para el instituto musulmán de París, sin que nadie lo acusara de violar la laicidad del estado.

El tratado de Versalles del año 19, impuso a Polonia las medidas necesarias para garantizar los intereses de las minorías étnicas de religión o de lengua. Y el tratado especial de igual fecha con Polonia ha prescrito en consecuencia que comité escolares designados por las comunidades judías aseguraran bajo la vigilancia general del estado la distribución de *la parte proporcional de los fondos públicos adjudicados a las escuelas judías* (Artículo 10).

Disposiciones semejantes obran en los tratados de Saint Germain, con Austria, año 1909; el de Neully, con Bulgaria, año 1919; el de Trianón; con Hungría, año 1920 el de Sévres, con Turquía, año 1920. «En las ciudades y distritos donde resida una cantidad considerable de súbditos austriacos, pertenecientes a minorías étnicas de religión o de lengua, *esas minorías obtendrán una parte equitativa en el beneficio y en la adjudicación de las sumas que pudieran imputarse a los fondos públicos por el presupuesto del estado, los municipios u otros, cuyo fin fuere educacional, religioso o caritativo*» (Art 68 del tratado de Saint Germain; 55 de Neully, 58 de Trianón y 148 del de Sévres).

Refiriéndose a esta disposición de los tratados Mr. Clemenceau, presidente del consejo, decía: *que era la expresión misma de la civilización moderna constituida por el respeto recíproco de los derechos de todos, de la protección de las minorías.*

Y escribía a Paderewski, presidente de Polonia, refiriéndose a estas cláusulas.

1. Las disposiciones del tratado relativas a la enseñanza no contienen nada que no sea ya previsto por las instituciones de enseñanza en muchos de los estados modernos más civilizados.

2. No es incompatible con la soberanía del estado reconocer y subvencionar escuelas donde los niños sufrirán la influencia religiosa a la cual están habituados en sus hogares. (Citado por el doctor Amadeo).

La repartición proporcional existe también en Dinamarca, Canadá y varios estados de Norte América.

En Chile la ley de 26 de agosto de 1920, fija las condiciones para que las escuelas particulares de enseñanza primaria, general o vocacional, puedan percibir la subvención anual de 25 pesos por alumno de asistencia media, fijada por la misma.

Bastan los antecedentes apuntados para demostrar las ventajas del proyecto que someto a la honorable cámara.

Otras emergen del mismo sistema y atañen a la dignidad de la función docente. La *repartición proporcional escolar* sería un estímulo para la enseñanza privada y un aliciente para el ejercicio del magisterio equiparándolo como es justo a las demás profesiones liberales por el apoyo oficial y la garantía económica. Y ésta es una de las grandes aspiraciones del magisterio.

La enseñanza por el estado que coloca todos los resortes de la misma en

las manos del ministro de instrucción pública o del consejo de educación, coarcta la libertad del maestro, lo somete a una disciplina de fierro, le cierra los horizontes y lo convierte en un autómata, sin voluntad propia, sin iniciativa.

El ministerio formula los programas, fija las horas de clase, los métodos didácticos, los textos y el maestro debe seguir escrupulosamente las indicaciones del superior so pena de ser exonerado.

El profesional del magisterio queda sometido a la misma disciplina absurda a que sometería los médicos del consejo de higiene, si pretendiera fijarles las fórmulas terapéuticas, los modos de examen a los textos de consulta.

Pero el maestro que egresa de la escuela normal con su título, casi siempre en situación económica difícil, no puede dudar en la opción. Entre la escuela privada, de vida generalmente precaria, donde las dificultades no se reducen sólo a las de orden económico, sino a las múltiples trabas que el ministerio o el consejo de educación suelen poner a las escuelas libres, por razones técnicas o por razones ideológicas, opta por la escuela oficial bien rentada, con los beneficios de la jubilación y con la perspectiva del ascenso, por más que haya de sacrificar su criterio, su voluntad y sus ideas, ante la omnipotencia del Estado.

La escuela libre subsidiada, le ofrecería en cambio las mismas ventajas sin los inconvenientes señalados y siempre que en su enseñanza se ciñera a las normas generales que el Estado puede fijarle y que no haya en ella nada contrario a la moral y a las buenas costumbres, encontraría amplio campo para el desarrollo de todas las buenas ideas y de todas las iniciativas de su inteligencia.

El fomento de la enseñanza libre debe ser una seria preocupación del Estado. Atenas no tuvo estado docente. Jamás los gobiernos gastaron un centavo en la educación del pueblo. La enseñanza fué totalmente libre, sin más reparo que no enseñar nada contra la religión del estado». La violación de este precepto costó la vida a Sócrates, y el destierro a Alcibiades. Y Atenas ha sido la maestra del mundo en muchas ciencias, artes y letras.

Esparta en cambio tenía el estado docente y la historia no conserva memoria de las obras de arte o de ciencia, que hubieran florecido en su suelo.

Mientras el maestro no sea libre, la enseñanza es esclava».

Sobre este punto son oportunas las palabras de un publicista francés, que en gran parte podemos aplicarnos nosotros.

«La servidumbre que dobliga todo nuestro sistema de enseñanza bajo el yugo de inexcusables programas no puede menos que arrancar justas quejas a toda inteligencia libre. Es preciso que se piense en esto seriamente: el programa de Francia es una cadena que sujeta al niño casi desde la cuna y que crece con él, sin abandonarle un instante, hasta el día en que hombre ya, se le considere apto para una profesión pública. Desde la escuela de las aldeas, hasta la licenciatura el programa lo sujeta riguroso, apremiante, implacable. ¡Si no aprisionase más que al discípulo! Pero también pesa sobre el maestro».

El profesorado no es más que una rama de la gran administración del país, una especie de ejército, con sus comandantes en jefe, sus generales, capitanes y sargentos, bajo la alta autoridad del ministro. Los programas oficiales constituyen el código de guerra. Ninguna iniciativa para el profesor, ninguna para el alumno.

El uno no tiene más que enseñar conforme a los programas oficiales lo que el otro ha de aprender. Ninguna autonomía en los cuadros de este ejército de trabajadores. Son reclutas por orden superior. ¿Hay vacante un puesto? Pues el ministro se encarga de proveerlo. ¿Se rompe una rueda de la máquina? Pues se pone otra. He aquí a lo que está reducido el cuerpo de profesores en un país donde la libertad ha pasado con tantos trabajos del vocabulario a las costumbres, y parece ser únicamente un tema de discurso o un arma en manos de las minorías o de los partidarios hambrientos de tiranía o absolutismos.

¡Cosa extraña! Este país apasionado por la libertad no ha logrado producir más que una organización sometida al estado, al poder, sin la menor independencia. Estos legisladores que soñaban formar al hombre moderno dándole una cultura universal, no han conseguido otra cosa que la creación de especialidades cada vez más mezquinas. Esta nación que ha sido la primera en exaltar la tolerancia como una virtud cívica y que ha inscripto en el código de sus principios, la libertad de conciencia, no ha podido alcanzar a ver otra cosa en la instrucción nacional, que un medio de hacer prevalecer tal o cual doctrina y sobre todo de desarraigar la antigua fe religiosa».

La participación de la escuela privada en el presupuesto del estado trae aparejado al contralor del poder público, a fin de que se sujeten a ciertas normas generales, como el minimum de instrucción, higiene y seguridad, número de alumnos y enseñanza que no afecte la moral ni el orden público.

Pero este contralor no ha de ser una tiranía, sino una garantía y ha de subsistir dentro de la más amplia libertad.

El sistema de la repartición proporcional es tan claro y sencillo es tan equitativo y justo, que no puede despertar ninguna resistencia y debe ser aceptado por todos los espíritus sinceros, cualquiera sea su ideología.

Es verdad que él favorecerá en mayor número a las escuelas, hijas sostenidas por los católicos, pero ello no puede ser un óbice para hacerlo práctico, desde que las mismas ventajas gozarán las escuelas de cualquier otra religión o tendencia filosófica, como las protestantes y judías, o aquellas, como las socialistas, rigurosamente laicas. El hecho de que los católicos superen en número a las otras confesiones, no puede privarles de un derecho acordado a todos, sin incurrir en la más irritante de las injusticias.

Que enhorabuena el estado multiplique las escuelas, porque la acción privada no alcanza a llenar las necesidades y es menester la acción concurrente oficial, pero que al mismo tiempo y en forma eficaz, como un deber ineludible, fomente la enseñanza libre, para que ambas de consumo, puedan desterrar el analfabetismo del país.

Que el ejemplo de naciones tan adelantadas, como Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, sirva de apoyo a esta iniciativa, para que merezca el voto favorable del congreso.

A la Comisión de Instrucción Pública